

ENCUESTAS Y DEBATES

LOS ESTUDIANTES, LA EDUCACION Y LA POLITICA

JUVENCIO WING SHUM - DINAH RODRI-
GUEZ CHAURNET - JORGE CARRION - FAUS-
TO BURGUEÑO - EMILIO LEIVA - PABLO
GOMEZ - ARTURO BONILLA - ALONSO
AGUILAR M. - IGNACIO HERNANDEZ -
CARLOS SCHAFFER



EDITORIAL NUESTRO TIEMPO

ENCUESTAS Y DEBATES

Los estudiantes, la educación y la política

JUVENCIO WING - DINAH RODRÍGUEZ - JORGE CARRIÓN
- FAUSTO BURGUEÑO - EMILIO LEIVA - PABLO GÓMEZ -
ARTURO BONILLA - ALONSO AGUILAR M. - IGNACIO HER-
NÁNDEZ - CARLOS SCHAFFER



EDITORIAL NUESTRO TIEMPO, S. A.

1971

Colección: Encuestas y Debates

Primera edición, 1971

Derechos reservados conforme a la ley

© Editorial Nuestro Tiempo, S. A.
Avenida Universidad 771
Despachos 402-403
México 12, D. F.

Impreso y hecho en México

Printed and made in Mexico

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	7
El problema educativo en la América Latina — <i>Juven- cio Wing Shum</i>	9
La explosión demográfica y la crisis de la educación — <i>Dinah Rodríguez Chaurnet</i>	17
Gobierno, burguesía y reforma educativa — <i>Jorge Carrión</i>	30
El movimiento estudiantil en la provincia — <i>Fausto Burgueño</i>	44
Crónica del conflicto de Monterrey — <i>Emilio Leiva</i>	62
El 10 de junio: manifestación y represión — <i>Pablo Gómez</i>	74
Implicaciones políticas del 10 de junio — <i>Arturo Bo- nilla</i>	83
La “apertura democrática” — <i>Alonso Aguilar Monte- verde</i>	102
Acerca del movimiento estudiantil y la reforma uni- versitaria — <i>Ignacio Hernández Gutiérrez</i>	131
El movimiento estudiantil y la lucha revolucionaria — <i>Carlos Schaffer</i>	151
Apéndice	171

LA “APERTURA DEMOCRÁTICA”

Alonso AGUILAR MONTEVERDE

Acaso lo mejor sea empezar por preguntarnos si existe realmente el quiebre, la “apertura democrática” de que tanto hablan ciertos comentaristas —no digamos los voceros del PRI—, pues de no estar presente resultaría ocioso discutir los pros y contras de algo que ni siquiera existe, y de estar gestándose una nueva y progresista política oficial sería arbitrario y dogmático negarla, y débil —y hasta torpe— negarse a examinarla.

¿Está efectivamente en marcha una política que, a diferencia de la de gobiernos anteriores, responda al propósito de democratizar la vida pública y lograr un desarrollo nacional independiente? Quienes sostienen que esa política se afirma día a día aseguran que no se trata de que se hayan adoptado una o dos medidas aisladas y de corto alcance, en tal dirección, y menos todavía de que estemos frente a una situación en la que lo nuevo sean sólo palabras, palabras que, como tantas otras veces, no se compadecen con los hechos. Todo lo contrario: si la “apertura democrática” es ya el signo más característico de lo que algunos consideran una nueva estrategia del desarrollo nacional, ello es así, precisamente, porque hay hechos que demuestran que la revolución mexicana, a la que algunos suponíamos muerta desde hace años, empieza a recorrer una nueva etapa de reafirmación nacionalista similar al cardenismo, de desarrollo “con justicia social” y de clara proyección democrática. Y los hechos que lo comprueban —se nos dice— están a la vista de todos, salvo de quienes no quieren verlos. Entre los más

importantes podrían mencionarse: el nuevo estilo que el presidente Echeverría ha impreso a su gobierno, el equipo de jóvenes funcionarios con que ha formado su gabinete, la oportuna sustitución de aquellos que, de una u otra manera, fallaron en su encargo, las nuevas medidas adoptadas en los más diversos campos, el sentido nacionalista de la política oficial, la solemne ocasión escogida por las autoridades para dar a conocer el "testamento" político del general Lázaro Cárdenas, la liberación de estudiantes y profesores encarcelados con motivo de su vinculación al movimiento estudiantil de 1968 y, en fin, el empeño en "dialogar" y el convencimiento de que es necesario alentar la creación de organizaciones y partidos políticos que permitan a sus miembros defender sus intereses y opiniones, así como fortalecer a "la oposición" y, con ella, la democracia.

Intentemos un brevísimo examen de tales cuestiones.

¿Es o no cierto que el presidente Echeverría ha impuesto a su mandato un nuevo estilo? Sí, lo es. Su gobierno se antoja más ágil, más dinámico, más juvenil que otros y, al menos visto desde fuera, menos personalista. Pero ello siempre ha sido así. Cada presidente y aun cada administración tienen su estilo, su fisonomía propios, en los que ejercen influencia la edad, la formación, el origen social de aquél y, por otra parte, las condiciones del momento, lo que ocurre dentro y fuera del país y la naturaleza de los problemas más graves. Pero, aun en el mejor de los casos, un estilo democrático no basta para hacer un gobierno democrático.

Es cierto, también, que entre los colaboradores más cercanos del Presidente predominan quienes tienen entre 40 y 50 años de edad, es decir, personas relativamente jóvenes. Sin embargo, no es menos cierto que, al margen de su edad, los más altos funcionarios no son, ni mucho menos, progresistas o defensores de ideas políticas democráticas y avanzadas. En general son conservadores funcionarios de carrera, más o menos rutinarios y que en no pocos casos colaboraron y estuvieron de acuerdo con todos los gobiernos anteriores: con el de Díaz Ordaz y el de López Mateos, con el

de Ruiz Cortines y el de Alemán; son técnicos que, paradójicamente, han llegado a triunfar en la política negando con habilidad tener posiciones políticas, y, más que en otros gobiernos, son incluso empresarios privados que empiezan a convertirse en funcionarios públicos, del mismo modo que tantos funcionarios oficiales han acabado en negociantes privados.

Mas podría objetársenos: posiblemente ello sea así, pero admitiendo, sin conceder, que lo fuese, ¿no es cierto que el derechista Alfonso Martínez Domínguez fue sustituido, en el Departamento del Distrito Federal, por un hombre como el licenciado Octavio Senties, que ha sido y es revolucionario? ¿O que el progresista Luis Farías ha tomado, en el gobierno de Nuevo León, el lugar que hasta hace unos meses ocupó el reaccionario Eduardo Elizondo?

A riesgo de parecer insensibles y poco dados a las sutilezas, si hemos de juzgar lo que tales personas han hecho en sus ya largas carreras —no lo que hayan dicho aquí o allá o lo que sobre ellos se diga—, tendríamos que convenir en que la verdad es que Martínez Domínguez se volvió *derechista* al “renunciar” a su alto cargo; hasta antes siempre fue “revolucionario”, y ni los más audaces políticos del PRI se atrevieron jamás a negarlo. Y lo cierto, también, es que Farías se volvió “progresista” cuando lo hicieron gobernador y se quiso, habilidosamente, ganar a los estudiantes de Monterrey a la idea de que la presencia del ex locutor —conspicuo enemigo del movimiento estudiantil de 68— era un triunfo de la juventud. O sea, pues, que más bien podría decirse que todos ellos parecen ser de un mismo bando, igualmente conservador; lo que no implica que no haya, entre ellos, desacuerdos de diversa naturaleza.

¿Será entonces que los cambios más importantes están no en los funcionarios, sino en las medidas adoptadas por el gobierno? Resultaría imposible aún pasar lista de ellas en estas páginas; con todo, e independientemente del interés de algunas, hasta ahora no parece haberse dictado ninguna medida de especial importancia que acredite el propó-

sito democratizador o nacionalista de las autoridades. Ello no se observa ni en la nueva Ley Agraria ni en la tibia, intrascendente reforma fiscal de principios de año, ni en la tecnocrática y convencional "reforma educativa" de Bravo Ahuja, ni en el franco "diálogo" entre funcionarios públicos y empresarios privados, ni en las nuevas modalidades de la política de comercio exterior ni en la reforma administrativa, o siquiera en la correcta decisión de votar, con la mayoría de los países del mundo —y cuando ni los Estados Unidos podían ya ignorarla— en favor del ingreso de China en la ONU; y menos aún en la sustitución del procurador de la República, en la inexplicable expulsión de varios diplomáticos soviéticos, en la extraña idea de que en Corea del Norte se está fraguando derrocar al gobierno mexicano por la fuerza, o en la complaciente política oficial sobre inversiones extranjeras. Precisamente un día después de darse a conocer el "testamento" político de Lázaro Cárdenas, al parecer para que nadie lo tomara por uno de sus herederos, el embajador mexicano en Washington, señor Juan José de Olloqui, tras de dar a los inversionistas yanquis el conmovedor consejo de "no buscar provecho excesivo", les ofreció las más amplias garantías, trato igual al de los nacionales y la seguridad —según información exclusiva de *Excélsior*— de que:

México no tiene mentalidad para la expropiación. Por lo tanto, no deben temer, puesto que nadie perderá su propiedad. No cambiamos nunca —dijo enfáticamente el embajador— las reglas del juego.

...Ya expliqué —añadió— lo que significa la mexicanización. No se parece en ninguna forma a la expropiación...

Queremos exportar. Debemos exportar... es difícil hallar un lugar que ofrezca mayores incentivos, mano de obra barata, y una mejor actitud privada y oficial hacia las exportaciones que México...

Lo que, por cierto, bien saben los inversionistas extranjeros; tan bien que se antoja ocioso, además de lamentable, que algunos embajadores se muestren tan impacientes por vender incentivos, clima propicio a los capitalistas y, sobre todo, “mano de obra barata”, cuando son los propios inversionistas quienes reconocen que, “irónicamente, la mexicana es una garantía contra la expropiación...” y, al decir de Mr. John B. M. Place, presidente de *Anaconda Copper Company*, una medida tan diferente de la “chilenización” “como el día de la noche”, y tan estimulante para el capital extranjero que, en el caso de las minas de cobre de Cananea, ellos sugirieron al gobierno “mexicanizarlas”.*

¿Y qué decir del “testamento” del general Cárdenas? ¿No demuestran las medidas por él sugeridas poco antes de su muerte, y dadas a conocer el 19 de noviembre por su hijo Cuauhtémoc, que tales medidas exhiben una clara proyección democrática y nacionalista? En términos generales, sin duda —lo que por otra parte a nadie debiera sorprender, pues expresan una posición que Cárdenas mantuvo a lo largo de los años—. Pero, ¿corresponde esa posición a las del gobierno actual? En nuestro concepto, aun admitiendo que hay ciertas coincidencias en la concepción del Estado, en el reconocimiento de la posibilidad de rehabilitar al PRI, en la capacidad que se supone al gobierno para hacer ciertos cambios, y en otras cuestiones de importancia, es indudable que hay también discrepancias que sería un error menospreciar o dejar de advertir, pues son ellas las que explican por qué no puede verse en el general Cárdenas a un simple vocero de las posiciones oficiales. Quienes expresan estas posiciones son otros; son, por ejemplo, el profesor Sánchez Vite, del PRI, quien tomó las palabras del general como un ejemplo de “autocrítica” echeverriísta, y el licenciado Soto Izquierdo, quien, hablando oficialmente en el ambiguo e inesperado aunque seguramente no casual homenaje con-

* Véase la información de Alan Riding en *The New York Times* del 19 de septiembre del año en curso.

junto a Calles y Cárdenas, calificó las diferencias entre ambos de "anecdóticas" y, citando al presidente Echeverría, declaró que "en México no hay más ismo que el mexicanismo"; o el licenciado Corona del Rosal, quien reintegrado al gobierno, o al menos a su equipo de oradores, al recordar en un acto similar al ex presidente Ávila Camacho —ante la reveladora presencia del también ex presidente Alemán— llamó a reforzar la "unidad nacional", para "que continuemos la ruta progresista que ha recorrido nuestra patria".

Sin el ánimo de examinar aquí las posiciones cardenistas, o siquiera de compararlas en detalle con las del gobierno, creemos que puede ser útil subrayar algunas diferencias, pues el hacerlo nos permitirá apreciar, con objetividad, que el espíritu democrático y nacionalista de dichas posiciones no está presente en la doctrina ni en la política oficial. En efecto:

Ideario gubernamental

- Defensa de la unidad nacional
- Plena vigencia de la Constitución
- Reforma y modernización educativas
- Respeto absoluto al sufragio efectivo
- Independencia de los partidos de oposición
- Mexicanización de ciertas actividades y subsistencia de la banca privada
- Necesidad de elevar la productividad, para poder mejorar los salarios
- Facilidades al capital extranjero y estímulos a las empresas "mixtas"

Ideario cardenista

- Crítica a los excesos de tal política, y reconocimiento de la lucha de clases
- Necesidad de cambios para que la Constitución se cumpla cabalmente
- Reorientación de la educación para facilitar el cambio social
- Vigencia relativa del derecho de voto
- Subordinación de éstos al PRI
- Nacionalización de múltiples ramas, inclusive del sistema de crédito
- Necesidad de aumentar los salarios, pues la productividad del trabajo aumenta constantemente
- Política nacionalista, de carácter defensivo, frente a la inversión extranjera

Ideario gubernamental

- Impulso del comercio exterior y el turismo
- Reconocimiento de que los capitalistas mexicanos son nacionalistas
- Convicción de que en México, y ni qué decir en el gobierno, no existe una oligarquía
- Modernización agropecuaria y respeto a las leyes agrarias (incluyendo la reforma de Alemán al Art. 27 constitucional)
- Estímulo a los inversionistas nacionales y extranjeros
- Cooperación con los Estados Unidos, sin perjuicio de ocasionales y débiles protestas
- Inevitabilidad del capitalismo como marco estructural del desarrollo nacional
- El imperialismo norteamericano no existe, y nuestras relaciones con el país del norte son cordiales
- La paz interna, la estabilidad y ciertas reformas institucionales son las condiciones del progreso

Ideario cardenista

- Comercio con los países socialistas y promoción de un desarrollo nacional independiente
- Convicción de que "carecen de todo sentido nacional y sólo se mueven por afán de lucro"
- Convicción no menos firme de que "si siguen las cosas como van, el país estará a expensas de los grupos financieros y su poderosa periferia..."
- Reducción de la pequeña propiedad consagrada por la reforma alemanista de 1946, y liquidación del neolatifundismo
- Abandono de la "falsa tesis" de que son los inversionistas y su dinero, no el trabajo de las masas, quienes crean la riqueza
- Adopción de una política antimperialista apoyada en las fuerzas populares
- Recomendación de "no seguir acariciando la falsa perspectiva del inevitable transcurso del ciclo capitalista del desarrollo..."
- El imperialismo no sólo existe, sino que es el principal obstáculo a nuestro desarrollo
- Para asegurar la estabilidad y la paz interior se requieren reformas sociales profundas,

Ahora podrá apreciarse más fácilmente que las posiciones gubernamentales siguen siendo conservadoras y aun francamente reaccionarias, y que están bien lejos de las que —éstas sí democráticas y nacionalistas—, al impulso de una coyuntura internacional propicia, del fin del antidemocrático maximato callista y de una nueva constelación de fuerzas populares y progresistas, cobraron vida en México, hace 35 años, bajo el cardenismo, o fueron defendidas por el general Cárdenas años después.

Ni siquiera parece que la liberación de alrededor de cuarenta presos políticos a partir del último diciembre —concedida, por cierto, a medias y con severas limitaciones— demuestre que esté abriéndose una brecha democrática y renovadora, pues si bien tales personas fueron puestas en libertad se asegura que otras setenta, encarceladas hasta el año pasado —y entre quienes hay periodistas, intelectuales, estudiantes, dirigentes obreros y campesinos—, siguen en prisión, y que por lo menos otras cuarenta, de las aprehendidas en los últimos nueve meses tan sólo en la ciudad de México, siguen a estas horas en la cárcel. Al escribir las presentes líneas se anuncia, inclusive, que Demetrio Vallejo ha sido nuevamente aprehendido, ahora en el estado de Coahuila, según algunos funcionarios por "delitos comunes y desacuerdos intergremiales denunciados por el propio sindicato de ferrocarrileros". La víctima, en cambio, ha dado otra explicación: "Mi detención es producto de la represión sistemática que se ejerce en mi contra y en contra de los que luchamos por un México más limpio y menos corrompido" (citado por Emmanuel Carballo, en *Excélsior*, 11 de noviembre).

Todo lo cual comprueba que, pese al empeño con que algunos funcionarios niegan que hay presos políticos, a la fecha no hay menos sino probablemente más o quizá tantos como hace un año.

Lo anterior no significa que el intento "democratizador" del gobierno se reduzca a la palabrería demagógica y al bla, bla, bla tan socorridos en nuestro medio. Aun no ha-

biendo notables cambios en la proyección de la política socioeconómica, hay sin duda un interés de los funcionarios por lo que ha dado en llamarse “el diálogo”, por oír y sobre todo por hacerse oír en círculos en donde, como ocurre entre los estudiantes, es patente la inconformidad; y más todavía: hay un propósito abierto y reiterado de alentar la formación de nuevos partidos políticos que se desenvuelvan dentro del régimen electoral en vigor y, desde luego, dentro de la actual estructura de poder. En esto, esencialmente, parece consistir la “apertura”; y la posición oficial no es, estrictamente, nueva, por más que hasta ahora nunca fuera objeto de tanto estímulo de parte del gobierno.

Desde que era candidato a la presidencia, el licenciado Echeverría reiteró —hasta tomar cuerpo su opinión en una conocida divisa publicitaria—, que prefería “un voto en contra que una abstención”. Respondiendo en el fondo a la misma línea de conducta, desde 1960-62, y de nuevo en la campaña presidencial de 64, empezó a esgrimirse la tesis de que los grupos inconformes debían encauzar su acción a través de los partidos existentes o, si así lo preferían, establecer otros nuevos. Más de una vez hicieron los funcionarios de entonces la misma excitativa, y para estimular a la “oposición” se crearon, en 1963, las diputaciones lopezmateístas “de partido”, con base en un proyecto del que, se asegura, fue autor el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.

A estas horas ya no sólo los más altos funcionarios políticos, sino hasta muchos comentaristas de prensa, radio y televisión, exaltan las virtudes de la vieja y maltrecha “democracia representativa” e insisten en la necesidad de organizar nuevos partidos que sustituyan a los “grupos de presión”. El propio general Cárdenas subraya, en su “testamento”, que la organización cívica de nuevos grupos “contribuiría a fortalecer al régimen...”; y el licenciado Moya Palencia, secretario de Gobernación, llega aun a afirmar que “los grupos de presión distorsionan el cuadro democrático del país...; son los partidos políticos —asegura— las ins-

tituciones que la democracia representativa ha creado para que se expresen las ideas de los ciudadanos y de los grupos". "Desde este punto de vista, no sólo es plausible, sino inclusive deseable, que las corrientes de oposición se organicen en partidos políticos y luchan dentro de los cauces de la ley..." (*Excélsior*, 5 de noviembre de 1971).

¿A qué obedece el empeño oficial en que las "corrientes de oposición" se organicen? ¿No es extraño que el *invencible* PRI, que en el último cuarto de siglo no ha sabido lo que es una sola derrota, empiece a hacer gala de "buen perdedor" y a toda costa quiera alentar a sus enemigos para que le den e incluso le *ganen* la pelea electoral? ¿Cómo explicar que hasta los diarios y revistas más conservadores, en mayor o menor medida sometidos políticamente al gobierno, en vistosos caracteres y en forma gratuita, o sea sin cobrar por ello un centavo, recojan con profusión los anuncios de quienes, a tono con el llamado oficial, parecen dispuestos a jugar a la "democracia representativa" con el PRI?

Para comprender mejor todo esto es menester recordar algo de lo que ocurre en México desde los años cuarenta. El año 1941 fue un año crucial para la izquierda mexicana; lo fue porque con él se inicia el gobierno derechista de Ávila Camacho, porque en él se extiende a América la segunda guerra mundial y porque, bajo el impacto del conflicto, oficialmente se adopta en nuestro país una engañosa y patriótera política de "unidad nacional" que, en esencia, identifica los intereses de la burguesía con los de la nación y utiliza a ésta como pretexto para colocar a las masas del pueblo a los pies de aquélla. La política de "unidad nacional" pospone y aun abandona las reformas sociales apenas iniciadas en la etapa cardenista, sustituye la lucha contra el imperialismo por la cooperación interamericana y emplea la inflación, el incentivo fiscal a los empresarios, la congelación de salarios, la ilegalización de las huelgas, la integración del movimiento popular a la estructura cuasi corporativa del partido oficial y la "browderización"* de la izquierda, para

* La "browderización" de la izquierda consistió en aceptar, bajo

redistribuir la riqueza y el ingreso sociales y trasladar el cada vez mayor excedente económico producido por millones de trabajadores a una pequeña, voraz oligarquía que, aun en plena guerra, pero especialmente en los años de la euforia alemanista, se apresta a dilapidar a sus anchas dentro y fuera del país.

Al concluir la guerra era obvio el significado de la política de "unidad nacional": al pueblo tocaba sobrellevar los sacrificios mientras la clase dominante concentraba y disfrutaba de los beneficios. Pero eso no era todo: lo más grave fue que tal política desmovilizó a las masas, las hizo renunciar a sus más legítimas demandas, abatió su conciencia de clase y logró que hasta el Partido Comunista quedara a la zaga de una burguesía supuestamente nacional que, en vez de aliarse con el pueblo para combatir al imperialismo—lo que debía ocurrir conforme al esquema revisionista—, se atrincheró en la estructura de la dependencia y se aprestó a rechazar aun las más justas exigencias populares.

Sin una estrategia revolucionaria propia y una vanguardia independiente y combativa, el movimiento obrero y popular cayó en el desarrollismo y en el oportunismo. En vez de ver en la burguesía el principal enemigo de clase, así como un agente históricamente incapaz de hacer posible un desarrollo autónomo, los dirigentes reformistas hicieron de ella el ariete del progreso, convirtieron mágicamente al Estado capitalista en aliado del pueblo y, sin comprender la proyección, el verdadero alcance y el alto precio de un desarrollo dependiente, que por fuerza agudizaría la explotación de los trabajadores y acentuaría la lucha de clases, aceptaron la contemporización, el seudonacionalismo burgués y

la influencia del entonces dirigente del Partido Comunista de los Estados Unidos, Earl Browder, una línea oportunista de sumisión frente a la burguesía y de confianza en que el capitalismo monopolista norteamericano, aliado circunstancialmente a la URSS en la lucha contra el nazismo, sería, aún después de la guerra, una fuerza democrática capaz de luchar, del lado del socialismo, por un mundo mejor.

el espejismo democrático. La política colaboracionista de Lombardo hizo posible el "charrismo" y contribuyó decisivamente a iniciar el largo reinado de Fidel Velázquez, lo que no sólo entrañaría la subordinación política de los obreros a la burguesía, sino inclusive —a veces a cambio de un plato de lentejas— la frecuente renuncia a las más modestas reclamaciones económicas.

Cuando, concluida la guerra, se entrevé la posibilidad de rescatar la independencia, innecesaria y gravemente comprometida, desde los Estados Unidos se hace estallar una nueva guerra: se trata ahora de la "guerra fría" que Churchill y Truman lanzan en 1946 y que es una especie de resurrección fascista, pues el conflicto se desata en tiempos de paz y, como en los años de Hitler, el enemigo es de nuevo el socialismo. Mientras en el ámbito internacional se abre paso la cruzada anticomunista, que en América Latina tiene por entonces su principal expresión en el pacto militar de Río de Janeiro (1947), interiormente la política de "unidad nacional" sigue su marcha y en su versión alemanista toma la forma de un extraño pacto obrero-patronal y de una creciente sumisión de los trabajadores al gobierno y a los empresarios privados.

De 1948 a 1958 se producen numerosas luchas populares y se sufren no pocos desencantos, frustraciones y derrotas. Los intentos del Partido Comunista y de otros grupos y organizaciones de izquierda para desembarazarse de una línea política débil y errónea son importantes y significativos. Pero, dividida la izquierda y en buena medida desvinculada de las masas obreras y campesinas, y sometidas éstas férreamente a los intereses de la burguesía, resulta muy difícil avanzar en la lucha propiamente política y rebasar planteamientos que a menudo sólo expresan ciertas reivindicaciones democráticas aisladas. Aun así se consiguen algunos avances, y tanto en el campo como en las ciudades se registran frecuentes protestas, huelgas, movilizaciones más o menos espontáneas, denuncias e invasiones de latifundios, caravanas del hambre y, desde luego, atropellos y medidas

represivas de todo orden, con las que se pretende frenar la lucha popular.

A partir de 1958 el panorama político se reanima y las acciones de masas se intensifican. La lucha de los maestros, y sobre todo la de los ferrocarrileros, resquebrajan seriamente el sistema de control de los sindicatos. Pero la respuesta oficial es violenta y no se hace esperar: millares de obreros son despedidos de sus puestos, otros tantos concentrados en el Campo Militar Número 1, y los principales dirigentes, con Demetrio Vallejo a la cabeza, son aprehendidos y encarcelados durante años. Entre 1960 y 1964 se activa la lucha política: aparecen nuevas publicaciones, surgen nuevas agrupaciones y el Movimiento de Liberación Nacional logra atraer, movilizar y, aunque en forma generalmente laxa, explicable dados su carácter y la diversidad de fuerzas que lo integran, inclusive organiza a numerosos grupos de campesinos, obreros, estudiantes y profesionistas en buena parte del país. A las reivindicaciones socioeconómicas más socorridas se añaden pronto otras en las que empieza a ponerse el mayor acento en el aspecto político: libertad a los presos políticos, lucha contra la corrupción, denuncia de atropellos y arbitrariedades en contra de las masas populares, rechazo de la seudodemocracia del PRI, solidaridad con la revolución cubana y con las luchas antimperialistas que en países hermanos empiezan también a cobrar fuerza por entonces.

Es, sin embargo, en 1968 cuando, a partir de un incidente interescolar sin importancia, reprimido con lujo de fuerza por la policía, se generaliza la lucha estudiantil en el Distrito Federal y, casi simultáneamente, en varias universidades de provincia. En pocos días —lo que sin duda revela la magnitud del descontento popular y la creciente politización de amplios sectores de la juventud— se articula un importante movimiento político estudiantil; se crea el Consejo Nacional de Huelga, se multiplican las brigadas, toma cuerpo un pliego de seis demandas concretas y se efectúan varias manifestaciones masivas, realmente impresionan-

tes y que en forma dramática culminan en la matanza del 2 de octubre, en Tlatelolco.

Tras del "triumfo" obtenido por las fuerzas armadas en la plaza de las Tres Culturas, acaso piensa el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz que la violencia lanzada por el gobierno no será estéril, pues con ella se dará muerte a un movimiento estudiantil incontrolable. Pero la realidad es otra. Si bien los estudiantes pierden, temporal y aun definitivamente, a muchos de sus mejores dirigentes, otros toman enseguida las riendas, y todos comprenden que ha llegado la hora de replegarse, de saber esperar, de reorganizarse para poder sobrevivir, de entender que aun la lucha por unas cuantas demandas democráticas concretas, en verdad bien modestas, concita una enconada hostilidad e impone riesgos que pueden comprometer la libertad y hasta la vida.

La manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971 comprueba que el movimiento no muere en Tlatelolco. La sangre inocente allí derramada no es bastante para ahogar la lucha estudiantil. Más bien obliga a abrir una nueva fase y transforma al movimiento en un esfuerzo más coherente y de mayor alcance. Aunque sigue siendo una movilización amplia en cuyo seno se dan, necesariamente, contradicciones insuperables, el movimiento madura, se radicaliza, se despoja de ciertas explicables ilusiones y sus demandas se tornan más definidas y concientes. La vanguardia estudiantil ya no pide el diálogo con las autoridades; ahora son éstas las que, empeñosamente, invitan a dialogar a los jóvenes, y las que tratan de persuadirlos de que debe retornarse a la normalidad. Pero la "normalidad" es el pasado. Varios años de lucha han hecho comprender que para lograr avances de cierta significación no basta hablar con los funcionarios: es preciso hacer cambiar muchas cosas y conquistar posiciones a las que siempre se opondrá la clase dominante.

Tales son los antecedentes, el marco en que aflora la "apertura democrática". El desarrollo de las tres últimas décadas, fincado en la explotación brutal de las masas campesinas y obreras y en el enriquecimiento escandaloso de

una pequeña oligarquía, acentúa los desequilibrios socioeconómicos y vuelve cada vez más precaria la estabilidad política. La reforma agraria, con todo y quedar trunca, cumple la misión de modernizar parcialmente la agricultura para poder contar con las materias primas y alimentos que la industrialización reclama y, sobre todo, para proveer al Estado, a los grandes agricultores y a las nuevas empresas urbanas, de todo tipo, de una mano de obra barata, suficientemente móvil y política y aun sindicalmente desorganizada, e incapaz, por tanto, de protestar y exigir mejores condiciones de vida.

Mas ni el rígido control oficial logra impedir que los problemas se multipliquen y agraven. La población asalariada se incrementa de prisa y empieza a romper un viejo marco que para muchos es ya asfixiante; la práctica de declarar cada nueva huelga "inexistente" comienza a ser ineficaz; la continua "reelección" de ciertos funcionarios sindicales es repudiada por los trabajadores. Los jornaleros del campo luchan por organizarse al amparo de la ley y muchos obreros, en las ciudades, no se conforman con las migajas que sus padres aceptaban calladamente unos años atrás. Tres lustros de luchas populares cambian el panorama político de la nación, extienden la inconformidad, agudizan la lucha de clases y ponen en guardia a la burguesía, y en particular a los sectores de ésta que directamente detentan el poder. El sistema del PRI y de las elecciones prefabricadas, de los líderes "charros", la corrupción y el fácil enriquecimiento de unos cuantos millares de familias privilegiadas, comienza a estremecerse. El modelo enajenante de la industrialización sustitutiva de importaciones y su cada vez más obvia secuela de dependencia, desempleo y desigualdad en el proceso de desarrollo, y la gestación de una crisis económica internacional —la llamada crisis del dólar—, que agudiza el desequilibrio de la balanza de pagos, alienta la inflación y a la vez la deflación y lleva al país a endeudarse más y más en el exterior. Todo ello explica por qué el actual gobierno se empeña en fraguar una fórmula política nueva, vistosa,

atrayente, que siendo en el fondo más o menos inocua lo ayude a restañar viejas heridas, a suavizar ciertas contradicciones y desacuerdos y a rehacer su prestigio y reforzar su posición política. Porque una cosa es obvia y, además, explicable: lo que se persigue no es transformar el sistema, sino consolidarlo, buscar el reacomodo de los grupos y fuerzas que en el seno de la propia burguesía y, desde luego, en otros sectores, encuentran cada vez más difícil convivir en el marco institucional establecido. El presidente Echeverría lo dijo claramente en su primer informe al Congreso de la Unión: "Cuando hay indicios de que nuestras normas de convivencia están en peligro, debemos reafirmarlas con mayor convicción". Y, en otro pasaje, afirmó: "...nuestro sistema político tiene la experiencia y la solidez suficientes para revisar sus métodos sin alterar sus principios..."

No hay, pues, campo para la especulación. El alcance de la "apertura democrática" es éste: no alterar los principios sino los procedimientos, los métodos; probar una nueva táctica que, ante el desprestigio y la creciente ineficacia de las empleadas hasta hoy, por enésima vez permita a la burguesía insistir en que "la patria es primero", engañar a las masas y hacerlas marchar a la zaga de aquélla, de sus intereses, sus compromisos y su ideología. Convencido el gobierno de que el descontento es real y de que, sin perjuicio de volver a emplearla cuando las condiciones lo aconsejen, no podrá liquidársele por la fuerza —como lo han demostrado múltiples hechos en los últimos años—, lo que ahora intenta —procediendo, por cierto, con mayor inteligencia— es encauzarlo, institucionalizarlo, abrirle una brecha aunque a la postre resulte un callejón sin salida, y hacer creer que los grupos de "presión" son "desquiciadores" de la armonía y la democracia y que, por tanto, deben convertirse en partidos. La verdad es que esos grupos, en la medida en que sean independientes y realmente de izquierda, resultan en efecto "perturbadores", pero perturbadores porque ejercen presión y porque lo hacen en condiciones y a través de mecanismos que escapan no a la ley, sino al sistema oficial

de control. Por ello, en nuestra opinión, se pone tanto énfasis en la conveniencia de convertir esos “extraños” grupos o, como gustan, peyorativamente, decir sus enemigos: “grupúsculos”, en “verdaderos” partidos, naturalmente minoritarios y que concurren a las elecciones, refuercen la democracia y actúen en la Cámara de Diputados con cinco o diez representantes, en el terreno y, desde luego, en torno del “mayoritario” y poderoso Partido Revolucionario Institucional.

Así, es comprensible que el nada audaz profesor Sánchez Vite, presidente del partido oficial, declare que “el PRI no teme a la formación de nuevos partidos”. “Al contrario... su aparición tendrá necesariamente que fortalecer la unidad priista” (*El Día*, 16 de noviembre). En lo que parece haber un amplio consenso en el sector gubernamental es en que los “grupos de presión” son peligrosos, entrañan un “riesgo grande, pues la voluntad ciudadana no puede expresarse a través del maniobreo oscuro de grupos... que buscan sólo la satisfacción de sus intereses particulares...” y que distorsionan nuestra vida democrática... (*El Día*, 14 de noviembre.) O, más claro todavía: “El peligro no lo representan quienes ejercen sus derechos cívicos para enaltecer la vida social; el peligro está en el núcleo de los ajenos a la participación política organizada...” De lo que se trata, por ello, en particular, es de “evitar que los jóvenes aumenten el número de los abstencionistas, de los indiferentes” (editorial de *El Día*, del 13 de noviembre).

Y el cambio de “métodos” ocurre, debemos decirlo, en un contexto estrecho, convencional, como corresponde a una posición formalista que concibe la democracia —el mismo presidente Echeverría así lo ha expresado— como “...un conjunto de formas de conducta, que se originan en la libertad de la conciencia pública”, y que postula que “promover la democracia es impulsar el desarrollo”; el desarrollo, naturalmente, capitalista. Lo que, en otras palabras, es hacer de la democracia un instrumento del desarrollismo. Todo esto revela que no está en marcha, ni mucho menos, un pro-

ceso que arranque del reconocimiento de que el primer obstáculo a cualquier avance democrático, aun meramente político, es el PRI y su sistema de control de las organizaciones de masas. Pero también revela que la "apertura democrática" no es un mero juego de palabras del tipo del superficial, intrascendente parloteo en que han caído algunos funcionarios públicos y los dirigentes de la Confederación Patronal, a propósito del carácter y las fronteras de la intervención del Estado en la actividad económica. La "apertura" es una expresión de la lucha social, un nuevo momento de ella y, a la vez, un nuevo método de enfrentamiento a viejos problemas que recientemente se han agudizado. Es un hecho político real, no carente de significación, con el que la clase en el poder pretende, en resumen, conseguir varias cosas:

- 1) Volver menos burdo el carácter monopolístico del partido oficial, renunciando, a partir de aquí, a las ventajas del monopolio "puro", a cambio de asegurarse, en el cómodo marco de un falso pluripartidismo alimentado por el propio gobierno, las ventajas de un oligopolio, en el que el PRI convierta en socios menores a los partidos de "oposición".
- 2) Otorgar nuevas y más atractivas facilidades a los grupos reformistas que, haciéndose eco de la "apertura" y del llamado oficial, acepten "robustecer" la democracia mexicana y contribuyan a ello con un puñado de sufridos "diputados de partido".
- 3) Mitigar el descontento, que inclusive en las filas de la burguesía ha estado presente, sobre todo desde 1968, y al propio tiempo fortalecer la posición oficial, por una parte frente a los grupos más conservadores —de fuera del gobierno— que, incapaces de calibrar y defender en conjunto sus intereses de clase, no sólo los del pequeño sector de la burguesía a que pertenecen, quisieran ver actuar al gobierno con "mano de hierro" ante cualquier expre-

sión de inconformidad popular; y por la otra: usar la "apertura" como medio para enfrentarse también a quienes, no identificados plenamente con el presidente Echeverría y su equipo (ciertos diazordacistas, martinezdominguistas, coronadelrosalistas, etc.), desde dentro del propio gobierno, desde el sector paraestatal, desde el PRI y las direcciones "charras" en que ejercen alguna influencia definden celosamente la estabilidad y el orden y ven en cualquier intento de cambio, así sea intrascendente o aun benéfico para la clase dominante, una grave amenaza para el régimen "de la Revolución".

- 4) Atraer a ciertos grupos de la pequeña burguesía que alrededor del movimiento estudiantil y del ambiente renovador que ha privado en algunas universidades, y bajo el impulso de las luchas populares de los últimos años, se han ido radicalizando, pues de no encontrarse alguna fórmula que les abra una perspectiva inmediata de reacomodo ventajoso en el marco institucional imperante, amenazan con integrarse en la izquierda y romper con la ideología y las fórmulas políticas de la clase en el poder.
- 5) Ganar, concretamente, a los estudiantes —con el propósito esencial de hacerlos renunciar a la independencia que hasta ahora han sabido mantener— a la tesis de que si bien en otro momento pudo haberse justificado la rebeldía juvenil un tanto "anárquica", lo que ahora importa es reencauzarla, hacerla sentir a través de los canales que el régimen mantiene abiertos, e incluso expresarla en el propio Congreso de la Unión a través de jóvenes diputados que, diríamos nosotros, estén dispuestos a empezar a burocratizarse, a envejecer y a enriquecerse a los 21 años.
- 6) Reforzar a la corriente oportunista que a lo largo de la historia política contemporánea de nuestro

país, y especialmente en los últimos treinta años, tanto ha contribuido al fidelvelazquismo, al "charrismo", al corporativismo del PRI y a que muchos sigan creyendo que la burguesía mexicana es una de "las más hábiles" del subcontinente.

- 7) Tratar de desalentar, y sobre todo de aislar y debilitar, denunciándolas como fuerzas "sectarias", "ultrarradicales" y "antipatrióticas", divorciadas de la "realidad mexicana", a todas aquellas personas y grupos que, convencidos de que el reformismo y el desarrollismo sólo podrán llevar a nuevos espejismos y frustraciones, intentan forjar una estrategia independiente, genuinamente revolucionaria, que permita librar a las masas de la influencia nefasta de la corriente oportunista que ahora, con tanto celo, trata la burguesía de robustecer.

La coyuntura que examinamos no es, por lo demás, estrictamente mexicana. Refiriéndose a la situación actual en los Estados Unidos, Gil Green hace notar que "en una era de fermentación social la clase dominante necesita un movimiento liberal que pueda funcionar como válvula de escape del descontento popular y que impida que las masas se muevan en una dirección política plenamente independiente".* Con no menor razón y el solo cambio de "apertura democrática" por "movimiento liberal", la observación podría aplicarse a lo que pasa en México, en donde, como hemos visto, lo que se busca es precisamente esa válvula de escape para mitigar el descontento.

¿Significa tal cosa que la burguesía no sea capaz de ningún avance democrático real? Lenin solía decir: "Hay democracia burguesa y democracia burguesa". Y, en efecto, hay diferencias en la capacidad democrática de la burguesía. Nadie podría negar que la lucha que a lo largo de siglos

* *The new radicalism; anarchist or marxist?* International Publishers, Nueva York, 1971.

libró la burguesía contra el feudalismo, aunque nunca o casi nunca rebasó sus intereses de clase, implicó un formidable avance e hizo posible la democracia liberal propia de la fase competitiva del capitalismo. Pero la perspectiva democrática de la burguesía, pese a lo que hace años postulaban los Bernstein y, más recientemente, los Strachey o los Galbraith, es cada vez más angosta. La libertad política es en gran parte virtual cuando no hay libertad económica. Y en la época de los monopolios, como se sabe, esta última libertad desaparece casi del todo; y si ello es así en los países metropolitanos lo es todavía más bajo el capitalismo del subdesarrollo. ¿Qué libertades son aquí posibles y cuáles no? ¿Acaso la de producir lo que se quiera, la de comprar y vender a quien más convenga, la de elegir la ocupación que se prefiera, la de competir, organizarse y luchar contra el orden establecido, o sólo la de contribuir, en nombre de la ley y de la democracia, a reforzar el estado de cosas existente?

Las posibilidades democráticas de la burguesía mexicana eran unas hace un siglo, cuando Juárez luchaba contra el clero y la vieja oligarquía terrateniente, otras cuando buscaba su definitivo afianzamiento como clase dominante en la revolución de 1910-17, y otras bien diferentes en 1971, cuando, seis decenios después de haberse afianzado en el poder, se enfrenta ya no a fuerzas más conservadoras que ella, sino al peligro de que las masas tomen un cauce independiente y revolucionario. Las libertades que ahora defiende la burguesía no son las de antes. Mientras en su etapa de ascenso luchó por la libertad de comercio, de trabajo, de empresa, de asociación, de pensamiento y de cultos, porque sólo en un clima de libertad podía imponerse al viejo régimen feudal, en una fase como la actual, que en todas partes es de franca decadencia, las libertades que le interesan son la de vivir parasitariamente, la de explotar a los demás, la de asociarse con el capital extranjero, la de importar artículos suntuarios, la libertad de cambios, la de especular impunemente, la de dilapidar la riqueza

social y, cuando más, permitir a ciertos sectores políticamente inconformes de la pequeña burguesía que se enfrentan a ella como grupos minoritarios, en el marco y las condiciones que más le convengan y sin perjuicio, claro está, de usar, entre cada luna de miel "democrática", las medidas represivas necesarias para sofocar el descontento y la acción de las masas.

La propia "apertura democrática" oficial está mostrando el estrecho marco en que se desenvuelve la acción del gobierno. Como hemos visto en las declaraciones antes transcritas, lo que se busca es acabar con los "grupos de presión", principalmente estudiantiles y, en general, con aquellos que mantienen posturas independientes, y no con los "grupos de *opresión*", de la derecha. A éstos no se les invita a organizarse porque ya lo están; lo están no solamente en la Asociación de Banqueros, en las confederaciones patronales de comerciantes e industriales, en los clubes de leones y rotarios, sino en el propio partido oficial, al que en buen número, al amparo de la política de "unidad nacional", están afiliados. Y el que la vieja política seudounitaria, de colaboración clasista, se proyecte ahora hacia "arriba y adelante" no cambia sustancialmente las cosas.

Quienes se empeñan en ganar adeptos a la causa de la "apertura democrática", abriendo nuevas rendijas por las cuales la "oposición" pueda colarse hasta la Cámara de Diputados, parecen no comprender que el peligro para la democracia no lo constituyen los comités de lucha estudiantiles, ni los grupos de trabajadores del campo y la ciudad que exigen respeto a sus sindicatos, ni los intelectuales que insisten en que los problemas fundamentales de nuestro pueblo sólo podrán resolverse mediante cambios de fondo realmente estructurales y revolucionarios. El obstáculo con que hoy tropieza un desarrollo medianamente democrático en México no son quienes se oponen al sistema imperante: es éste el escollo principal; lo son los monopolios, la apropiación privada de los medios de producción y de la riqueza social que los trabajadores producen, la dependencia estructural que carac-

teriza al capitalismo del subdesarrollo y la fuerza creciente de las grandes empresas extranjeras; el control antidemocrático de las organizaciones obreras, de los campesinos y los burócratas, la orientación pro-empresarial de la política del Estado, el hecho de que sea el Presidente quien elige a su sucesor y el hecho de que el PRI no sea, estrictamente hablando, un partido, sino más bien una poderosa agencia que el gobierno utiliza para mantener y fortalecer la presente estructura de poder. Tales son los mayores obstáculos y aquellos, por tanto, a los que habría que enfrentarse en una apertura democrática genuina.

Caer en un democratismo formalista, retórico, liberal—casi podría decirse, notarial— que haga de la inviolabilidad de las leyes un fetiche, un tabú, una categoría intocable y al margen de las clases—en un país como el nuestro, en que la propia Constitución se viola a cada momento— es, sin duda, inadmisibile. Creer, por otra parte, en la utopía neoliberal de que, con base en la “no reelección”, en un sufragio más o menos efectivo, en la intervención del Estado en la vida económica, en un burocrático remedo de planificación, en nuevos líderes “charros” que tomen el lugar de los viejos y en un pluripartidismo artificial que se exprese en un no menos artificial parlamento, controlado por el PRI; creer que con ese herramental se puede enderezar el sistema, sanearlo y hacerlo servir al pueblo y no a los capitalistas, es algo así como creer en cuentos de hadas.

Ello no significa, naturalmente, que el plantear ciertas demandas democráticas o determinadas reformas carezca de toda importancia o sólo pueda hacerse en condiciones que la clase en el poder aproveche para su beneficio. Los avances democráticos, por limitados que sean, pueden resultar positivos, y a veces rebasan con mucho a quienes los promueven y auspician. Su importancia no radica en que resuelvan los más graves problemas: consiste en que pueden contribuir a facilitar la lucha revolucionaria, en que pueden alterar el siempre precario equilibrio del sistema y ayudar a concientizar a las masas. La lucha democrática, aun por pequeños

avances, pone de manifiesto dos hechos igualmente significativos: lo difícil que, bajo el capitalismo, es lograr cualquier cambio que tienda a beneficiar a las mayorías, y lo esencial de comprender que, aun en aquellos raros casos en que el cambio se consigue, resulta del todo insuficiente para resolver los problemas fundamentales.

Sin embargo, quienes en forma sistemática menosprecian esos avances y tienden, mecánicamente, a pensar que la liquidación de toda institución democrática puede llevar fácilmente a la crisis del sistema y de ahí, más o menos de prisa, al socialismo, olvidan la trágica experiencia europea de los años veinte y treinta y, lo que es más grave, que el fascismo no es algo históricamente liquidado; antes al contrario, es uno de los rasgos característicos del capitalismo monopolista, como en estos momentos lo comprueba —concretamente en el escenario latinoamericano— lo que ocurre en el Brasil, en Centroamérica, en Bolivia y Paraguay, para no mencionar otros casos análogos, en donde está configurándose una estrategia neofascista con la que, después del fracaso del reformismo democratizante a lo Alianza para el Progreso, las oligarquías locales y extranjeras pretenden acelerar el desarrollo latinoamericano recurriendo a vías más enérgicas y aun abiertamente militares.

Apoyar medidas concretas de tipo antimperialista que, en su caso, adopten las autoridades, medidas que afecten a la gran burguesía y que impulsen el desarrollo económico —no meras palabras o declaraciones de intención—, sería políticamente útil y hasta necesario. Lo que, como es obvio, no debiera implicar ir a la zaga de las decisiones y, en la práctica, a menudo de las vacilaciones del gobierno, ni caer en un nacionalismo romántico, puramente emocional, o, lo que es peor, en un nacionalismo folklórico y mercantilista al que sólo apele la burguesía demagógicamente y cuando le convenga, o hacer del capitalismo de Estado una virtud, cuando, en rigor, es sólo una necesidad histórica que de ningún modo resuelve los problemas más graves del subdesarrollo.

La lucha por ciertas reformas no es ajena a la lucha por el poder: es parte integrante de ésta. Lo es porque en ellas se expresan necesidades y problemas de los obreros, los campesinos y el pueblo en general, y porque son manifestaciones de una realidad de la que no puede jamás divorciarse el movimiento revolucionario. Si la izquierda no incorpora en sus programas las demandas más legítimas de las masas, si no las respeta, estudia, defiende con lealtad en la lucha cotidiana con quienes las reclaman, y a menudo no ayuda a darles forma y a convertirlas en exigencias concretas y en formulaciones políticas justas, nunca podrá atraer a las masas, no podrá lograr que éstas se capaciten para la lucha política, y menos aún podrá crear las "condiciones subjetivas" para conquistar el poder. Concebir el proceso de cambio social sin reformas es como imaginar una estrategia sin táctica, o como trazarse una meta sin saber cómo alcanzarla ni cómo responder a los obstáculos que surjan en el camino. Menospreciar las reformas supone, además, no comprender el carácter dialéctico del proceso social y el papel sin duda importante que en él, y concretamente en las transformaciones cualitativas, juegan los cambios de grado, así como no entender que cuanto más se impulsen ciertos cambios, de aquellos que aceleran el crecimiento de las fuerzas productivas —desde luego, en tanto no enajenen ni hagan perder su independencia a la izquierda—, más tienden a agudizarse ciertas contradicciones y más se ayuda a crear, en un sentido histórico, una "situación revolucionaria".

Lo grave de las reformas es que a veces no pasan de ser concesiones palaciegas, más o menos mezquinas, con las cuales se pretende comprar a bajo precio la inconformidad de quienes, legítimamente, reclaman cambios mayores. Lo grave de ellas es que cuando no se comprende correctamente su alcance confunden a las masas, abaten su conciencia de clase, las hacen abrigar adormecedoras ilusiones y las llevan, a la postre, a la inacción y el conformismo. Y por otra parte que, siendo por sí solas insuficientes, quedarse en meras reformas, así sean importantes, es oportunista y antirrevo-

lucionario; es aceptar la posición errónea de quienes pretenden hacer creer que la historia se desenvuelve no mediante transformaciones profundas y a saltos, sino en forma gradual, evolutiva y armoniosa; es, en síntesis, proyectar la lucha como un esfuerzo para preservar el viejo orden a base de parches, remiendos y paños calientes, y no para crear una nueva sociedad.

En nuestro caso en particular, lo que sucede es que aun en plena "apertura democrática", si bien se habla cada vez más en el sector oficial de la necesidad de ciertos cambios, poco o nada se hace al respecto. Las reformas emprendidas hasta ahora son mínimas y de muy corto alcance, parecen no querer dañar a los grupos privilegiados que siempre oponen resistencia al cambio, y realizarse sin entusiasmo por una burocracia conservadora que para llevar adelante cualquier transformación importante tendría que empezar por renovar —por decirlo con una expresión de moda en el gobierno— sus "estructuras mentales".

Ahora bien, junto al peligro del reformismo están siempre, en el otro extremo, el sectarismo, el anarquismo, el aventurerismo, la tendencia a trabajar en pequeños grupos cerrados, a veces cayendo en un radicalismo dogmático y pueril; la tendencia a menospreciar lo que es útil y viable frente a lo espectacular pero imposible, a aislarse de la realidad y de los trabajadores y sus problemas concretos, a recurrir al terrorismo como única arma de lucha, a exaltar el papel del individuo, a desdeñar la organización y, en última instancia, a no comprender que la transformación de la sociedad es un proceso, un proceso histórico regido por leyes objetivas que operan a través de la acción humana, y no algo que pueda modificarse caprichosamente, al antojo de un puñado de personas, desde una trinchera aislada.

La izquierda mexicana está, en nuestra opinión, frente a una alternativa que entraña todo un desafío. Sin perjuicio de seguir alentando las luchas populares, de multiplicar la acción y de no abandonar la agitación, necesita organizarse

cada vez mejor y elevar su nivel de conciencia y el de los obreros, los campesinos, los estudiantes y los intelectuales.

Ha llegado la hora de empezar a articular las luchas populares y de pasar del espontaneismo a una acción sistemática que responda y al propio tiempo contribuya a forjar una ideología y una política propias, definidas y revolucionarias. Vivimos un momento de fermentación, de crecientes inquietudes, de radicalización de millares de compatriotas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. En esta fase es lógico, y en nuestro concepto aun inevitable, que surjan muchos grupos que aspiran a organizarse y a participar directamente en la lucha revolucionaria, y tal diseminación de esfuerzos no es necesariamente positiva o negativa; es más bien la expresión de un hecho, de una realidad; es la fase inicial de un proceso de cambio. Durante algún tiempo seguirán, probablemente, apareciendo nuevas agrupaciones. Al margen de ello habrá que luchar por la unidad y la acción conjunta, especialmente de aquellas que, cualquiera que sea su grado de importancia, mantengan posturas firmes o independientes y luchen por un cambio profundo, realmente estructural, desde posiciones revolucionarias. En nuestro concepto, conjugando la acción de esas fuerzas, de las organizaciones socialistas y comunistas que ya existen y de los nuevos grupos que seguramente surgirán en esta etapa, estrechando el contacto de unos y otros sin que nadie trate de imponerse arbitrariamente a ninguno, podrá irse forjando en la lucha misma, de abajo hacia arriba y con la participación creciente y cada vez más conciente del pueblo, una estrategia revolucionaria común, aunque las tácticas y métodos, como es inevitable, sean, sobre todo al principio, más o menos diferentes.

Pero, siendo esencial organizarse, pues sin organización no se podrá acaso ni sobrevivir en la fase que se inicia, sería un grave error caer en un mecanicismo funcionalista y pensar que la organización, por sí sola, basta. El verdadero reto para la izquierda consiste, en primer término, en tener que crear formas de organización adecuadas y en hacerlas

funcionar democrática y permanentemente, pues la izquierda también requiere de una profunda democratización. Al hablar de organización no aludimos exclusiva o siquiera fundamentalmente a una *forma* o mecanismo que pueda ofrecer ventajas sobre otro. La organización es mucho más: es un proceso nada fácil, a veces largo y sujeto a fuertes altibajas, que supone ir creando día con día, en la práctica, no solamente en el papel, las condiciones necesarias para trabajar en común con disciplina, con entusiasmo, con conocimiento de causa, confianza y respeto mutuo, espíritu democrático y genuina camaradería. En otras palabras: para llevar adelante con buen éxito una lucha revolucionaria se requiere —y esto no es tan obvio como podría parecer— no cualquier organización, sino una organización revolucionaria.

En segundo lugar, la que parece ser a estas horas la prueba de fuego para la izquierda mexicana es: o cae, de un modo u otro, en el seguidismo y el oportunismo reformista, que tanto daño han hecho durante tantos años; es decir, o vuelve a confiar en que una burguesía supuestamente nacionalista, enérgica y patriótica —ayudada o inclusive impulsada por elementos pequeñoburgueses progresistas, explícitamente inconformes— sea capaz de librar a nuestro país del atraso y el subdesarrollo, y se frustra así, otra vez, la posibilidad de una transformación social profunda, de un avance histórico realmente importante y de una auténtica liberación nacional, o, como ha empezado a ocurrir en años recientes, se avanza en el trazo de una ideología propia, se superan de una vez por todas las posiciones reformistas burguesas y pequeñoburguesas, más o menos populistas, se consolida la independencia de la clase obrera y de los sectores dispuestos a luchar con ella y se abre la perspectiva, a plazo quizá no muy largo, de un proceso revolucionario que a su debido tiempo logre triunfar.

El peligro de que hablamos no es algo vago o incierto que afecte, más o menos en abstracto, a la izquierda, o que unilateral y exclusivamente comprometa a ciertos sectores o grupos. Es un grave peligro que se cierne sobre todos:

sobre los obreros, los campesinos, el movimiento estudiantil y los intelectuales. Es, además, difícil de combatir, porque aun en aquellas instancias en las que se debaten cuestiones decisivas que amenazan gravemente sus intereses la burguesía no acostumbra dar la cara y enfrentarse directamente a los problemas; se vale de otros, de personas que en apariencia nada tienen que ver con ella, y aun de obreros, campesinos e intelectuales sujetos a su ideología y que, por encima de lo que dicen —que casi siempre es, desde luego, izquierdizante—, tienden en el fondo a reforzar el sistema, a hacerlo funcionar mejor y a mantener a las masas sometidas a los designios de la clase dominante.

Así se plantean las cosas, creemos nosotros, en estos momentos: o se refuerza el reformismo y el oportunismo, a partir de las ilusiones que, explicablemente, han renacido como expresión de contradicciones reales y de cambios en la estructura social y en la lucha de clases, o se rompe en definitiva con esas posiciones y se empieza a fincar una estrategia verdaderamente revolucionaria. De la opción que ahora se haga depende el futuro político y social de México; de ella depende que la nuestra siga siendo una nación explotada y pobre, estructural e inevitablemente subordinada al imperialismo, o una nación libre, capaz de elegir su destino y de empezar a recorrer el camino mexicano del socialismo.